



Asamblea General

Distr. general
19 de febrero de 2013
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

22º período de sesiones

Tema 4 de la agenda

**Situaciones de derechos humanos que
requieren la atención del Consejo**

Carta de fecha 28 de enero de 2013 dirigida al Presidente del Consejo de Derechos Humanos por la Misión Permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la Oficina de las Unidas en Ginebra

En relación con el diálogo interactivo previsto con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea en el 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, tengo el honor de reiterar la posición de principio de la República Popular Democrática de Corea.

La República Popular Democrática de Corea se opone de manera categórica a la figura del "Relator Especial" y a la "resolución" por la que se establece el mandato del "Relator Especial".

Así se ha indicado claramente en varias ocasiones por medio de comunicaciones oficiales, en particular las cartas de mi predecesor de fecha 8 de junio de 2007 (A/HRC/5/G/5), 30 de enero de 2008 (A/HRC/7/G/3), 29 de enero de 2009 (A/HRC/10/G/6), 21 de enero de 2010 (A/HRC/13/G/7), 19 de enero de 2011 (A/HRC/16/G/2) y 1 de febrero de 2012 (A/HRC/19/G/1) dirigidas a sus predecesores.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para señalar a su atención y, por conducto de usted, a la atención del Consejo, los siguientes hechos en particular.

En primer lugar, el "Relator Especial" es resultado del enfrentamiento político y de un complot contra la República Popular Democrática de Corea, y no tiene ninguna pertinencia para los derechos humanos.

Como es ya bien sabido, la figura de este "Relator Especial" fue creada, y existe, como resultado de las llamadas "resoluciones" sobre la República Popular Democrática de Corea.

Todas esas "resoluciones", sin excepción, se han aprobado por la fuerza y son parte de los actos hostiles y asfixiantes que vienen cometiéndose constantemente desde hace más de medio siglo por los Estados Unidos de América, el Japón, los Estados miembros de la Unión Europea y sus aliados con miras a eliminar el Estado y el sistema social de la República Popular Democrática de Corea. No guardan relación alguna con una promoción y protección genuinas de los derechos humanos.

Ya en 2003, cuando se impuso la aprobación de la primera "resolución" sobre la República Popular Democrática de Corea, los Estados Unidos de América y sus aliados occidentales habían estado haciendo todo lo posible por asfixiar a la República Popular Democrática de Corea con la excusa de la cuestión nuclear y, como prolongación de estas maniobras, llegaron a patrocinar e imponer la aprobación de la "resolución" sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea en el 59º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

De hecho, en ese momento, el diálogo y la cooperación bilaterales en materia de derechos humanos entre la República Popular Democrática de Corea y la Unión Europea, que se habían iniciado en junio de 2001 por primera vez en nuestra historia, atravesaban una etapa excelente, y la República Popular Democrática de Corea había estado manteniendo un nivel de cooperación considerablemente alto con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

No existía razón alguna para que esos países ignorasen de manera unilateral y deliberada el proceso de diálogo y cooperación en materia de derechos humanos en curso, y recurrieran a la hostilidad y el enfrentamiento, a menos que en realidad albergaran intenciones ocultas con respecto a la República Popular Democrática de Corea.

A pesar de ello, los Estados Unidos de América, el Japón y los Estados miembros de la Unión Europea optaron por imponer, con ánimo de provocar el enfrentamiento, la aprobación de la "resolución" y desde entonces han venido manteniendo cada año esta actitud hostil.

Puesto que los motivos por los que se patrocinaron las "resoluciones" sobre la República Popular Democrática de Corea eran falsos y despreciables, el proceso de su aprobación forzosa vino inevitablemente acompañado en su totalidad por maquinaciones y toda clase de injusticias.

Baste con un ejemplo: ya en 2003, la "resolución" se mantuvo en el máximo secreto durante todas las etapas, desde su redacción hasta su presentación oficial por sorpresa, a modo de emboscada, poco antes de la votación, y fue aprobada por la fuerza mediante el despotismo, la arbitrariedad, la presión ejercida entre bastidores y las argucias de los Estados Unidos de América, el Japón y los Estados miembros de la Unión Europea. Se prescindió totalmente de la práctica, seguida tradicional y comúnmente en la esfera de los derechos humanos en el plano internacional, de informar con antelación a la parte directamente interesada y de celebrar consultas con ella.

Hasta los propios patrocinadores de la "resolución" admitieron esta irregularidad.

El "Relator Especial", que fue creado y existe como resultado de esta maquinación, no es más que una marioneta que va de un sitio para otro representando los pérfidos intereses de quienes lo manejan, que son los Estados Unidos de América, el Japón y los Estados miembros de la Unión Europea.

En segundo lugar, la existencia del "Relator Especial" es contraria a la actual tendencia de oponerse a la politización de los derechos humanos y promover un diálogo y una cooperación genuinos en la esfera de los derechos humanos.

La razón del establecimiento del Consejo de Derechos Humanos era erradicar la politización, la selectividad y la dualidad de criterios que habían cundido durante más de 60 años en la esfera internacional de los derechos humanos, así como instituir un mecanismo de diálogo y cooperación genuino que beneficiara a todos.

Sin embargo, es de lamentar que sigan existiendo mandatos relativos a países concretos, como el del "Relator Especial", que constituyen un caldo de cultivo para la politización, la selectividad y la dualidad de criterios y son causa de grave preocupación.

Los países occidentales siempre se han empeñado en mantener los mandatos relativos a países concretos para seguir erigiéndose en "jueces de los derechos humanos", pisoteando la soberanía de aquellos países que no son de su agrado e interfiriendo en sus asuntos internos.

Como hemos señalado en diversas ocasiones, los mandatos relativos a países concretos implican precisamente enfrentamiento. El enfrentamiento nunca puede ser compatible con el diálogo y la cooperación genuinos, bajo ninguna circunstancia.

Por consiguiente, la postura sobre los mandatos relativos a países concretos seguirá siendo un criterio para determinar si se aspira o no al diálogo y la cooperación genuinos.

El mecanismo del examen periódico universal ha iniciado su segundo ciclo de trabajo como función indispensable del Consejo de Derechos Humanos, mediante el cual todos los países reciben un trato ecuánime e imparcial, pero continúan existiendo, en paralelo, los anacrónicos mandatos relativos a países concretos por los que se pone en evidencia a países determinados para avergonzarlos. Es algo completamente irónico e inadmisible que, por consiguiente, no debe seguir tolerándose. Solo así será posible que el Consejo deje de repetir el mismo error que la Comisión de Derechos Humanos y se convierta en un mecanismo de diálogo y cooperación genuino en el verdadero sentido previsto en los ideales que lo sustentan.

La República Popular Democrática de Corea considera que la soberanía y la dignidad son los elementos esenciales de su existencia.

Como en el pasado, la República Popular Democrática de Corea seguirá manteniendo en consecuencia su posición de principio de oponerse a la figura de este "Relator Especial", creado por motivos políticos, y de rechazarla.

Le ruego que tenga a bien distribuir la presente carta como documento del 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

(Firmado) So Se Pyong
Embajador, Representante Permanente